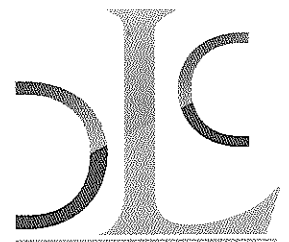


Señor

**Juez Administrativo del Circuito (reparto).**

**De Buga**



Abogado  
Universidad del Cauca

**DIEGO LEON CESPEDES SOLANO**, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, muy respetuosamente me dirijo a usted como mandatario judicial en virtud del poder legalmente conferido a mí por los señores Sebastián Monsalve Taborda y Jacqueline González Vargas, para incoar demanda de reparación directa por la falla en el servicio notarial y registral contra la Superintendencia de Notariado y Registro,- Oficina de Registro de I.I.P.P. de Tuluá, y la Notaría Primera de Tuluá (V), representados por el Superintendente de Notariado y Registro y la Notaria Primera de Tuluá, a efectos de que los declare administrativamente responsables de los daños y perjuicios materiales y morales a ellos ocasionados a raíz del otorgamiento de la Escritura Pública No 2443 de noviembre 4 de 2014 corrida en la Notaria Primera de Tuluá y registrada en la Oficina de Registro de I.I.P.P. de Tuluá.

La presente demanda la fundamento en los siguientes

#### **HECHOS**

- a. El señor Sebastián Monsalve Taborda y la señora Jacqueline González Vargas suscribieron un contrato de compraventa con la señora Gloria Inés Parra Escobar que se plasmó en la escritura pública No 2443 de noviembre 14 de 2014, la cual se corrió en la Notaria Primera de Tuluá-.
- b. La Notaría Primera de Tuluá, dio fe de que la señora Gloria Inés Parra Escobar era la persona que efectivamente suscribía la aludida escritura contentiva de la compraventa del inmueble allí descrito, lo cual a la postre resultó no ser cierto.
- c. La Oficina de Registro de I.I.P.P. de Tuluá, expidió el certificado de tradición del inmueble cuya matrícula inmobiliaria es la No 384-32768.

**Diego León Céspedes**

Derecho Civil - Administrativo - Familia



d.- Los señores Sebastián Monsalve Taborda y Jacqueline González Vargas, pagaron la suma de \$14.200.000 según la escritura pública No 2443 a que se alude anteriormente.

e) Los señores Monsalve Taborda y González Vargas fueron demandados penalmente ante la Fiscalía General de la Nación, pues resultó que la persona que suscribió la escritura pública No 2443 de noviembre 14 de 2014 como vendedora no era la señora Gloria Inés Parra Escobar, quien fue suplantada en tal instrumento público, tal como se comprueba con la copia de la escritura pública No 2355 corrida en la Notaria Tercera de Tuluá el día 19 de agosto de 2016.

e.- Tanto la Notaria Primera de Tuluá (V) como la Oficina de Registro de I.I.I.P.P. de Tuluá, ambas dependientes de la Superintendencia de Notariado y Registro, fallaron en la prestación del servicio a ellas asignado, causando graves perjuicios a los señores Sebastián Monsalve Taborda y Jacqueline González Vargas de orden material y moral.

### PRETENSIONES

Mis poderdantes, tienen las siguientes pretensiones:

**PRIMERA:** El pago de la suma de Veintinueve millones trescientos mil pesos de pesos (\$29.300.000) que pagaron los demandantes por la escritura pública No 2443 de 14-11-2014 y 2355 de 19-08-2016, a título de **perjuicios materiales**.


Así mismo que se pague por los demandados a favor de los señores Sebastián Monsalve Taborda y Jacqueline González Vargas, a título de **perjuicios morales** por la aflicción y depresión a ellos ocasionados por el hecho irregular del servicio notaria y registral, el equivalente a veinte salarios mínimos mensuales legales para cada uno, es decir \$27.540.000.

**SEGUNDA:** Que se reconozcan los intereses que se causen hasta que se efectúe el pago de la suma solicitada en la pretensión anterior.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente petición está fundamentada en lo consagrado en la Ley 446/98, el artículo 140 y 168 y siguientes del C.P.A.C.A.

**Diego León Céspedes**  
Derecho Civil - Administrativo - Familia

  
El Consejo de Estado en relación con la posición de garante ha señalado que "Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley- en sentido material- atribuye, en específico, a ciertos concretos supuestos a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida".(Sentencia del 18 de febrero de 2010. Rad. 18.436. Mg Ponente Mauricio Fajardo Gómez).

Cuando hay falla del servicio como en el presente caso, la Corte Constitucional tiene enseñado que "el actual régimen constitucional establece la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas , lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización". (Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 1996).

#### **RELACION PROBATORIA**

Comendidamente le solicito tener como pruebas los siguientes documentos que se allegan con esta petición de conciliación:

- a.- Copia de la Escritura Pública No 2443 del 14-11-2014 de la Notaria Primera de Tuluá y el certificado de Tradición.
- b.- Copia de la escritura pública No 2355 del 19-08-2016 de la Notaria Tercera de Tuluá.
- c.- Constancia de la audiencia de conciliación prejudicial.

#### **ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA**

La estimo en la suma de Ochenta y cuatro millones trescientos mil pesos, que corresponden a los perjuicios materiales y morales que se deprecian.

#### **JURAMENTO ESTIMATORIO.**

Bajo juramento estimo que los perjuicios materiales y morales causados a mis poderdantes, se determinan así:

**Diego León Céspedes**

Derecho Civil - Administrativo - Familia



a) Veintinueve millones trescientos mil pesos de pesos (\$29.300.000) que pagaron los demandantes por la escritura pública No 2443 de 14-11-2014 y 2355 de 19-08-2016, a título de **perjuicios materiales**.

b) A título de **perjuicios morales** por la aflicción y depresión a ellos ocasionados por el hecho irregular del servicio notaria y registral, el equivalente a veinte salarios mínimos mensuales legales para cada uno, es decir \$27.540.000 o sea la suma de \$55.080.000.

### COMPETENCIA

Es usted competente para conocer de este trámite de conformidad con lo prescrito por el C.P.A.C.A y la ley 446/98 y 1285/09.

### ANEXOS

Los enunciados como pruebas documentales aportadas en el acápite respectivo, copia de la solicitud para el archivo y poder debidamente conferido.

### NOTIFICACIONES

El Superintendente Nacional de Notariado y Registro, puede ser notificado en la Calle 26 No 13-49 Interior 201 Bogotá.

La Notaria Primera de Tuluá en la Calle 28 No 25-24

La Agencia Nacional de Defensa Judicial de la Nación en la **Calle 70 No 4-60 BOGOTA**

Mis poderdante residen en la Calle 20 No 1965 de Tuluá.

El suscrito recibirá notificaciones en mi oficina de la calle 25 No. 24-53 Tel. 3155218364, correo electrónico [diego\\_leon\\_25@hotmail.com](mailto:diego_leon_25@hotmail.com).

Atentamente,

  
Diego León Céspedes S.

C.C. 10'523.926 de Popayán

T.P. 19676 del C.S.J.

**Diego León Céspedes**  
Derecho Civil - Administrativo - Familia